



## I

La consulta plantea si resulta conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, la transmisión a determinados colegiados de información relativa a la ejecución contable de la Corporación consultante, incorporando información referida a las concretas retribuciones que se abonan al personal contratado por la Consultante, bien en virtud de contratos de arrendamiento de servicios de naturaleza no laboral, bien como consecuencia del vínculo laboral existente entre la Corporación y sus empleados.

En la consulta se hace constar que existe un requerimiento de información de determinados colegiados en este sentido, haciéndose igualmente referencia al hecho de que la denegación de dicha transmisión en ocasiones anteriores fue ya rechazada por la Corporación, habiéndose confirmado su resolución en vía contencioso-administrativa, precisamente sobre la base de la posible vulneración que dicha transmisión podía producir en los derechos a la intimidad y a la protección de datos de carácter personal de los afectados a los que se refería la información.

Igualmente, debe indicarse que del tenor de la consulta se desprende que los colegiados solicitantes no forman parte de ninguno de los órganos de la Corporación, por cuanto la transmisión de los datos a la que se refiere la consulta no constituiría un mero acceso a la información por parte del solicitante, en su condición de integrante de tales órganos, sino que dicha revelación se produciría a un tercero no integrado en la estructura de la corporación, constituyendo en consecuencia la misma una cesión o comunicación de datos de carácter personal, conforme a lo definido en el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999.

## II

En particular, respecto de la legitimidad de las cesiones o comunicaciones de datos el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone en su apartado 1 que “los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”, si bien será igualmente

posible la cesión en los supuestos contemplados en el artículo 11.2, cuyo apartado a), en particular, legitima la cesión si la misma se encuentra amparada por una norma con rango de Ley.

Tal y como se indica en la consulta, el supuesto planteado no encuentra apoyo en lo dispuesto en ninguna norma con rango de Ley, no pudiendo en principio entenderse que dicha habilitación se encuentra directamente amparada en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 30/1992, por cuanto el apartado 2 de dicho precepto dispone que “el acceso a los documentos que contengan datos referentes a la intimidad de las personas estará reservado a éstas, que, en el supuesto de observar que tales datos figuran incompletos o inexactos, podrán exigir que sean rectificadas o completados, salvo que figuren en expedientes caducados por el transcurso del tiempo, conforme a los plazos máximos que determinen los diferentes procedimientos, de los que no pueda derivarse efecto sustantivo alguno”.

No obstante, es preciso indicar que el catálogo de supuestos legitimadores del tratamiento se ha visto ampliado por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 24 de noviembre de 2011, por la que se resuelven las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo en los recursos interpuestos contra el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999. A su vez, el marco se ve igualmente afectado por las Sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en fecha 8 de febrero de 2012, por las que se resuelven los mencionados recursos.

La Sentencia del Tribunal de Justicia ha declarado expresamente el efecto directo del artículo 7 f) de la Directiva 95/46/CE, según el cual “Los Estados miembros dispondrán que el tratamiento de datos personales sólo pueda efectuarse si (...) es necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, siempre que no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran protección con arreglo al apartado 1 del artículo 1 de la presente Directiva”. Por ello, dicho precepto deberá ser tomado directamente en cuenta en la aplicación de la normativa de protección de datos de carácter personal por los Estados Miembros, y en consecuencia por esta Agencia Española de Protección de Datos, dado que como señala el Tribunal Supremo en su sentencia de 8 de febrero de 2012 “produce efectos jurídicos inmediatos sin necesidad de normas nacionales para su aplicación, y que por ello puede hacerse valer ante las autoridades administrativas y judiciales cuando se observe su trasgresión”.

Tal y como recuerda la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su apartado 38, el artículo 7 f) de la Directiva “establece dos requisitos acumulativos para que un tratamiento de datos personales sea lícito, a saber, por una parte, que ese tratamiento de datos personales sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, y, por otra parte, que no prevalezcan los derechos y libertades fundamentales del interesado” y, en relación con la citada ponderación, el apartado 40 recuerda que la misma “dependerá, en principio, de las circunstancias concretas del



caso particular de que se trate y en cuyo marco la persona o institución que efectúe la ponderación deberá tener en cuenta la importancia de los derechos que los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea confieren al interesado”.

Por este motivo, la sentencia señala en su apartado 46 que los Estados miembros, a la hora de adaptar su ordenamiento jurídico a la Directiva 95/46, deberán “procurar basarse en una interpretación de ésta que les permita garantizar un justo equilibrio entre los distintos derechos y libertades fundamentales protegidos por el ordenamiento jurídico de la Unión, por lo, conforme a su apartado 47 que “nada se opone a que, en ejercicio del margen de apreciación que les confiere el artículo 5 de la Directiva 95/46, los Estados miembros establezcan los principios que deben regir dicha ponderación”.

Teniendo en cuenta lo anterior, cabría plantear si en el presente supuesto el acceso por parte de los colegiados solicitantes a los datos referidos a las retribuciones mencionadas en la consulta podría fundarse en el interés legítimo de aquéllos, prevalente sobre el derecho a la protección de datos de los interesados a los que se refieren los datos, siendo preciso efectuar, en consecuencia, la ponderación a la que se refiere la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión de 24 de noviembre de 2011.

### III

Podría en este sentido, y en línea con la referencia ya efectuada al artículo 37 de la Ley 30/1992, invocarse que el acceso a la información garantiza el principio de transparencia en la actuación de la propia Corporación consultante, al darse conocimiento al modo en que se ha procedido a la ejecución de las cuentas de una entidad de derecho público y, en consecuencia, el cumplimiento por la misma de las obligaciones que le impone la Ley.

La ponderación del principio de transparencia y los derechos de los interesados a los que se refiere una información que pudiera hacerse accesible por terceros ha sido igualmente analizada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 9 de noviembre de 2010 (asunto Volker und Markus Schecke), en que se lleva a cabo un juicio de ponderación entre el deber general de transparencia al que se viene haciendo referencia y los derechos de los interesados personas físicas cuyos datos son objeto de publicación por la Administración Pública (tratándose en el supuesto analizado de datos sobre los beneficiarios de fondos procedentes del Fondo Europeo Agrícola de Garantía –FEAGA- y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural –Feader-).

La sentencia dedica a esta cuestión los apartados 72 y siguientes, analizando, según el primero de ellos, “si la limitación de los derechos

consagrados por los artículos 7 y 8 de la [Carta \(de Derechos Fundamentales de la Unión Europea\)](#) es proporcionada a la finalidad legítima perseguida” con la publicación de las ayudas recibidas con indicación de los beneficiarios de las mismas.

En este sentido, aclara en el apartado 79 que “si bien es cierto que, en una sociedad democrática, los contribuyentes tienen derecho a ser informados de la utilización de los fondos públicos ( [sentencia Österreichischer Rundfunk y otros](#), antes citada, apartado 85), no es menos cierto que para ponderar equilibradamente los diversos intereses en conflicto se requería que, antes de adoptar las disposiciones cuya validez es objeto de controversia, las instituciones competentes verificasen si la publicación, en un sitio web único por Estado miembro y de consulta libre, de los datos nominales de todos los beneficiarios afectados y de los importes específicos procedentes del FEAGA y del Feader percibidos por cada uno de ellos –y ello sin establecer diferencias en función de la duración de las ayudas percibidas, de su frecuencia, o del tipo o magnitud de las mismas– no iba más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos legítimos perseguidos, en especial habida cuenta de que tal publicación lesionaba los derechos reconocidos por los artículos 7 y 8 de la [Carta](#), aclarando en el apartado 80 que “por lo que respecta a las personas físicas beneficiarias de ayudas del FEAGA y del Feader, no parece que el Consejo y la Comisión hayan intentado ponderar equilibradamente, por un lado, el interés de la Unión en garantizar la transparencia de su actuación y la utilización óptima de los fondos públicos y, por otro, los derechos fundamentales consagrados en los artículos 7 y 8”.

Así, en el apartado 85 añade la sentencia que “es preciso recordar que, antes de divulgar información sobre una persona física, las instituciones están obligadas a poner en la balanza, por una parte, el interés de la Unión en garantizar la transparencia de sus acciones y, por otra, la lesión de los derechos reconocidos en los artículos 7 y 8 de la carta. Ahora bien, no cabe atribuir una primacía automática al objetivo de transparencia frente al derecho a la protección de los datos de carácter personal (véase en este sentido la [sentencia Comisión/Bavarian Lager](#), antes citada, apartados 75 a 79), ni siquiera aunque estén en juego intereses económicos importantes. Ello conduce al Tribunal a la conclusión de que “procede declarar inválidos el artículo 44 bis del [Reglamento núm. 1290/2005](#) y el [Reglamento núm. 259/2008](#) en la medida en que obligan, por lo que respecta a las personas físicas beneficiarias de ayudas del FEAGA y del Feader, a publicar datos de carácter personal de todos los beneficiarios, sin establecer distinciones en función de criterios pertinentes, tales como los períodos durante los cuales dichas personas han percibido estas ayudas, su frecuencia o, incluso, el tipo y magnitud de las mismas”.

#### IV

En el supuesto ahora analizado, a diferencia del planteado en la



sentencia, los criterios que deben regir la ponderación entre el principio de transparencia y el derecho fundamental a la protección de datos aparecen, en primer lugar, determinados por las normas aplicables al funcionamiento de los Consultantes de Abogados y, en particular, de la propia Corporación consultante, estableciéndose un criterio limitativo del acceso.

Así, el Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, establece los derechos de los colegiados frente al Colegio, incluyendo como tales:

- Participar en la gestión corporativa y, por tanto, ejercer los derechos de petición, de voto y de acceso a los cargos directivos, en la forma que establezcan las normas legales o estatutarias.
- Recabar y obtener de todos los órganos corporativos la protección de su independencia y lícita libertad de actuación profesional.
- Aquellos otros que les confieran los Estatutos particulares de cada Colegio.

En lo que se refiere al régimen económico de los Colegios y Consejos de Colegios de Abogados, el artículo 62.3 establece, por su parte que “todos los colegiados podrán examinar las cuentas del Colegio durante los quince días hábiles anteriores a la fecha de celebración de la Junta General o Asamblea Colegial que haya de aprobarlas”.

Esta previsión se concreta por el artículo 44 de los Estatutos del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, publicados en virtud de Resolución de 31 de julio 2007 Dirección General Política Interior y Cooperación con el Estado, que establece lo siguiente:

*“1. Corresponde a todos los colegiados el derecho de información sobre las cuentas anuales que podrá ejercerse durante los quince días anteriores a la celebración de la Junta General a la que hayan de someterse para examen y aprobación, pudiendo solicitar las aclaraciones que estimen procedentes. Asimismo, podrán solicitar una copia del informe de los auditores.*

*2. El derecho de información no permitirá el examen de los soportes contables y de cualquier otra información que permita conocer datos de carácter personal de los colegiados, empleados y colaboradores del Colegio o de terceros.*

*Además, podrá ser denegada la información solicitada en los casos en que, a juicio de la Junta de Gobierno, la publicidad de la información*

*solicitada perjudique los intereses colegiales, salvo que la solicitud esté apoyada por el 5 por 100 de los Colegiados ejercientes.”*

Es decir, los propios Estatutos de la Corporación consultante, norma que junto con el Estatuto General de la Abogacía delimita los derechos de los colegiados, tal y como dispone su artículo 17.1, clarifican el alcance del derecho de acceso a las cuentas, no incluyendo los datos concretos de carácter personal relacionados con la gestión del presupuesto.

## V

Pero además, este criterio no es sino reflejo de la doctrina emanada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Justicia de Madrid, que en su Sentencia de 25 de abril de 2007, referida a un supuesto similar al ahora planteado, viene a ponderar precisamente la prevalencia del derecho a la protección de datos de los interesados frente al principio de transparencia y el derecho de los solicitantes a acceder a los archivos y registros públicos.

En la citada Sentencia, la Sala señala, en primer lugar que las resoluciones denegatorias dictadas por la consultante “no hacen sino ponderar adecuadamente los derechos constitucionales en conflicto (derecho de acceso de los interesados a los documentos administrativos, y, derecho de terceros a la intimidad y protección de sus datos personales constantes en los documentos y archivos públicos), interpretar a la luz de los mismos las concretas normas legales del Estatuto General de la Abogacía y de los Estatutos del Colegio de Madrid, y aplicar, en fin, de forma correcta la doctrina jurisprudencial y constitucional sentada al respecto”, añadiendo que tales resoluciones y la sentencia de instancia objeto de recurso de apelación “motivan la limitación en el acceso a la contabilidad del Colegio, en el interés más digno de protección que representa el derecho a la intimidad de los afectados que figuran en el soporte informático que se pide, así como en la protección de los datos personales de estos”.

Concluye así la sentencia que “no puede por menos de señalarse que tanto el derecho fundamental a la intimidad, como el derecho a la protección de los datos de aquellos terceros que figuran en el soporte informático de la documentación que solicitaron los actores y cuyo conocimiento les fue limitado por el Colegio, justifican suficientemente, a tenor de lo dispuesto en el art. 18 CE la denegación de dicho conocimiento”.

## VI

De este modo, atendido el propio tenor de los Estatutos de la Corporación consultante y la doctrina emanada de la sentencia transcrita no cabe duda que tampoco resulta posible amparar el acceso solicitado en la aplicación directa del artículo 7 f) de la Directiva 95/46/CE, por lo que la imposibilidad de aplicar dicho precepto, unido a la no concurrencia de ninguno de los restantes establecidos en el artículo 11.2 de la Ley Orgánica 15/1999,



implica que para que procediera la cesión de los datos a los que se refiere la consulta debería contarse con el consentimiento de los interesados.